

Vida Internacional

EL PLAN KENNEDY

Como todo verdadero plan de cooperación internacional, el que el presidente Kennedy propuso el 13 de marzo se basa en un trabajo en común, de modo que si Estados Unidos aporta su esfuerzo financiero y técnico, los países latinoamericanos también deben hacer el suyo.

Durante años, América Latina ha estado reclamando —y con justísima razón— un cumplimiento efectivo, por parte del gobierno de Washington, de las obligaciones que para él se derivan del sistema interamericano. Ahora que los norteamericanos aparecen dispuestos —por fin— a hacer su parte, aparece también que las mayores dificultades para que resulte la tan reclamada rectificación habrán de provenir de... los países latinoamericanos.

Esto, a primera vista, tan paradójico que puede parecer hasta increíble, tiene varias causas bastante sencillas.

Es una alianza "Para el Progreso"

Una de las notas más insistentes, casi un "leit-motiv" en el discurso de Kennedy, es la de que el sentido histórico, la misión de Estados Unidos en el mundo en general y la justificación del sistema interamericano en particular es promover el progreso político y económico para lograr formas de vida individual y colectiva que den al hombre mayor libertad y dignidad. Esto excluye tanto la tiranía política como la explotación económica. En esta forma, ante los imperativos del momento actual y de acuerdo con su más auténtica tradición democrática, Estados Unidos no llama a sus aliados de este hemisferio a robustecer sus fuerzas militares contra una hipotética agresión extracontinental, ni a tomar medidas represivas contra el comunismo, sino a emprender conjuntamente un vasto plan de reformas sociales que liberen a los habitantes de este continente "de la degradación diaria del hambre y la pobreza", que les abran los horizontes de la cultura y de la participación efectiva en los beneficios de la civilización. No se trata de desarrollar la riqueza americana para que su aumento quede en manos de unos pocos privilegiados sino para que ella se distribuya, ante todo, entre la inmensa masa de los desposeídos.

Esto, en América Latina, es desde hace años tema de hermosos discursos, pero algo muy difícil de llevar a la práctica y, para casi todos los que tienen actualmente el poder, hasta peligroso, por lo menos si se le quiere realizar con la celeridad que ahora el nuevo gobierno norteamericano reclama.

Nueva y hasta "Peligrosa"

Cuando Mr. John Foster Dulles pedía a los gobernantes de América Latina que dieran mayores facilidades a las inversiones de sus conciudadanos y al funcionamiento de la "libre empresa" y reprimieran al comunismo, como medio de robustecer la base económica y de aumentar la seguridad política de la "democracia" y la solidaridad interamericana, pedía algo que no creaba problemas a la mayoría de los miembros de la O.E.A. Batista, Trujillo, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Castillo Armas, el o los Somoza, Odría, Stroesner, el presidente de turno en Haití, Ponce Henríquez en Ecuador o el hondureño Julio Lozano no sólo no tenían inconveniente en favorecer de tal manera el desarrollo de la "democracia" sino que estaban felices de poder recibir así armas, capitales y respaldo político contra los "comunistas". Y los demás, aunque no se sintieran felices, no tenían otra opción, y tampoco tenían la entereza para desarrollar una diplomacia más audaz. Sólo Costa Rica, bajo el gobierno de Figueres, se negó a ir a la Conferencia Interamericana de Caracas para hablar de democracia entre las bayonetas de Pérez Jiménez, Perón ratificó el Tratado de Río de Janeiro para obtener 125 millones del Eximbank y cuando el presidente Ibañez se negó a ir a Washington como protesta por la falta de cooperación norteamericana para enfrentar el problema de la caída del precio del cobre, la verdadera razón no se dijo a los cuatro vientos, como hubiera sido lo digno y hábil desde el punto de vista diplomático (unas semanas después silbaron o apedrearon a Nixon en cuatro países) sino que se inventó una pobre excusa protocolaria.

Ahora, en cambio, se pide a los gobiernos latinoamericanos que hagan rápidamente reformas agrarias para darle tierras a 90 millones de campesinos que no las tienen y para ello distribuyan las de 300 ó 400.000 latifundistas que tienen tantas que no saben, literalmente, qué hacer con ellas. Se les pide que estudien y apliquen reformas tributarias, para que el peso de los irracionales impuestos indirectos que grava a la gran masa consumidora se aligere y se reemplace por un impuesto progresivo a la renta en forma de que la pequeñísima minoría que tiene en sus manos entre la quinta y la cuarta parte de la riqueza latinoamericana contribuya proporcionalmente al financiamiento de los presupuestos nacionales. Se les pide, aunque en forma menos directa, que gasten menos en sus fuerzas armadas, para que dispongan de más recursos que invertir en darle al pueblo educación y habitación.

Todo eso es hermoso, humano y razonable, pero resulta que el presente orden social y político de la mayoría de los países de América Latina, y los gobiernos que son consecuencia, expresión o prisioneros de dicho orden, se basan en la existencia y mantenimiento de minorías latifundistas y plutocráticas y de poderosas fuerzas armadas. Aunque en algunas repúblicas exista

la voluntad o la conciencia "políticas" de superar con urgencia la situación existente, son tan débiles o precarias las fuerzas democráticas frente a la presión de los elementos reaccionarios que aun en esos Estados las reformas sólo pueden hacerse con mucha prudencia, y con una lentitud mayor quizá que la ya larga paciencia del pueblo.

Una "Alianza" contraria es posible

Ya se están viendo algunos síntomas. El más importante de los diarios chilenos ("El Mercurio"), en una nota editorial, comenta que, tal como lo ha señalado el presidente Kennedy hay en la propiedad agraria latinoamericana desigualdades que deben corregirse en aras de la tranquilidad social y del progreso económico, pero que en Chile la situación es bastante distinta a la de los demás países en general. Pues —agrega el comentario— en Estados Unidos no siempre se tiene en cuenta que cada país de este continente tiene características propias y sería muy perjudicial olvidar ese hecho...

No se necesita mucha imaginación para suponer que en Perú el diario del Premier don Pedro Beltrán va a sostener que el gobierno ya está haciendo una reforma agraria y a señalar todas las razones que hay par que las leyes tributarias no se descarguen sobre el 1% de la población que tiene en sus manos el 20% de la riqueza del país. Si en México, después de casi medio siglo de "revolución", 100.000 individuos perciben 36.000 millones de pesos y 10 millones de trabajadores y campesinos no ganan sino 28.000 millones, ¿por qué ha de lograr con facilidad el llamado del gobierno norteamericano un mejoramiento de lo que ha "institucionalizado" la "Revolución"? ¿No dirán también los mexicanos que "el sabio y democrático plan" "propuesto por el Presidente Kennedy va a hacer que algunas repúblicas latinoamericanas tengan que realizar lo que el pueblo mexicano ya ha conquistado con su Revolución?

Por otro lado, es evidente que el comunismo y el "fidelismo" van a desarrollar una campaña continental contra esta nueva y más hábil ofensiva del imperialismo norteamericano. Dirán que, so pretexto de mejoramiento social, busca reforzar su control de los gobiernos de América Latina y detener, con 500 millones de dólares, el vasto movimiento de liberación nacional que, con el respaldo de la Unión Soviética y a la cabeza del heroico pueblo cubano, está realizando Fidel Castro etc., etc...

Si los comunistas y sus aliados enarbolarán la bandera de la defensa de la soberanía de cada país contra la intromisión de los "yanquis" mediante sus nuevos "préstamos controlados", las clases que sientan amenazados sus privilegios por el "progreso" aceptarán la cooperación norteamericana en la medida que ella no destruya sus posiciones económicas y políticas. Los mo-

tivos serán distintos pero, en el hecho, se producirá una "alianza" para reducir al mínimo la aplicación eficaz de la que se ha propuesto para el "progreso".

El solo hecho de que hayamos llegado a la situación en que nos encontramos ¿no es, precisamente, una prueba de las dificultades naturales de América Latina para realizar el aporte que ahora se le pide y sin el cual esta oportunidad histórica puede malograrse?

Mirando desde Estados Unidos

Con los sectores políticos de derecha interesados en restringir o atenuar el alcance reformista y hasta revolucionario de la "alianza" y con los marxistas empeñados en hacerlo sospechoso de imperialismo, no va a ser fácil que se produzca en este continente esa movilización de las energías y esperanzas populares que Kennedy señalaba como necesaria par el éxito de su "plan". Esto es grave no sólo por lo que se refiere a las posibilidades de éste en América Latina, sino, antes quizá por lo que respecta al apoyo que necesitan en Estados Unidos los propios autores del "plan".

Pues no hay que olvidar que Estados Unidos no es ese país monolíticamente progresista o reaccionario que tanto la propaganda comunista como la propia norteamericana suelen tender a presentar. Si bien el antiguo aislacionismo no es sostenido ya ni por el diario del finado coronel McCormick en Chicago, siempre hay poderosos intereses contrarios a una diplomacia constructiva en América Latina o empeñados por razones de política interna en desacreditar la acción de un gobierno como el actual (o de cualquier otro). Por lo demás, es toda la idea de la "ayuda al exterior" la que está sujeta a crítica desde diversos ángulos; las dificultades de la balanza de pagos que enfrenta Estados Unidos no han hecho nada para quitar su fuerza, o más bien, su resonancia a esa crítica.

El plan de diez años propuesto por Kennedy supone la inversión —en gran parte a fondo perdido— de ingentes fondos fiscales, o sea, pagados por el contribuyente norteamericano. Otras inversiones serán préstamos del Banco Internacional, del Eximbank o del flamante Banco Interamericano, pero sujetos, por lo menos los de este último, a condiciones menos tradicionalmente "bancarias". Será necesario, a plazo más o menos corto, llegar a un acuerdo que establezca una especie de estatuto de las inversiones privadas, más favorable al desarrollo económico latinoamericano, sin perjuicio de una mayor seguridad para el inversionista de Estados Unidos.

Del mismo modo, conforme lo prometido por Kennedy, habrá de celebrarse acuerdos multilaterales o bilaterales sobre precios de materias primas (de las que nosotros vendemos y compran los norteamericanos). Y como, por otro lado, todo este proceso para el establecimiento de nuevas relaciones económicas irá acompañado de

apoyo colateral a la democratización política, serán muchos los intereses de todo orden que se opondrán al que promete ser, en la política latinoamericana de Estados Unidos, un cambio mayor que el que significaron F. D. Roosevelt y su "Buena Vecindad".

Los observadores políticos norteamericanos señalan que la popularidad y prestigio de Kennedy han aumentado enormemente, pero que su fuerza política efectiva, especialmente en la Cámara de Representantes (que debe aprobar sus proyectos de ley), dista mucho de haber aumentado en la misma proporción. Para una votación decisiva (la modificación del "Rules Committee"), el Presidente, que llegó a intervenir personalmente para conquistar votos, logró sólo una mayoría de 5 (sobre 437) y eso gracias a la defecación de 22 republicanos "liberales". Es perfectamente posible que, a corto o largo plazo (el plan dura diez años), la clásica alianza de los demócratas conservadores del sur con los republicanos pueda bloquear, en Washington, el desarrollo de la "alianza para el progreso" en América Latina, sobre todo si los países de este continente no son capaces de darle ese dinamismo social que, sólo puede determinar su buen éxito y, por lo mismo, imponerla hasta a sus enemigos de ésta o de la otra América.

ELECCIONES EN CHILE

Las elecciones parlamentarias chilenas del 5 de marzo podían tener interés para los demás países latinoamericanos porque ellas podrían servir para apreciar la distribución de las fuerzas políticas en una de las democracias más estables y organizadas de este continente. En Chile,* al igual que en otros países de América Latina, un gobierno de tendencia conservadora había estado aplicando las recetas del Fondo Monetario para contener la inflación mediante una política de "austeridad"; las elecciones para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y, prácticamente, la mitad del Senado darían la primera muestra de la reacción de la ciudadanía desde que en setiembre de 1958 los partidos de derecha, con aproximadamente un tercio de los votos, habían llevado a la presidencia de la República a don Jorge Alessandri.

Durante los primeros 26 meses de su gobierno, el presidente Alessandri ha podido obtener del Congreso el despacho de las leyes que desea gracias al apoyo de liberales y conservadores (los partidos que lo eligieron) y de los radicales. Estos han sabido colocarse en una posición que les permite gozar de las ventajas de la Administración sin tener responsabilidades de gobierno, pues mantienen frente a éste una actitud de "colaboración independiente". Los dos partidos de gobierno tenían en conjunto 56 diputados sobre un total de 147 y la preponderancia del Ejecutivo dentro del mecanismo constitucional chileno permite al Presidente, con el ejercicio

del veto, gobernar con el respaldo de sólo un tercio de los miembros de ambas ramas del Congreso. El apoyo de los 39 diputados y los 12 senadores radicales servía en caso necesario para dar al gobierno una amplia mayoría absoluta.

Las elecciones parlamentarias recientes no han significado cambios espectaculares sin embargo, el cuadro resultante es bastante distinto del anterior y está determinado por los siguientes hechos básicos:

a) Los dos partidos de Derecha (conservadores y liberales) bajaron de 56 a 45 diputados. La derrota conservadora ha sido especialmente seria, por la disminución del número de sus diputados (de 24 a 18) y la pérdida de todas las senaturías en juego. Y, esencialmente, la combinación de los dos partidos-eje del gobierno perdió el control del tercio del Congreso, cuya importancia ya se ha señalado.

b) El Partido Radical se mantuvo, con 396.000 votos (el 22,17) de los emitidos), como el más poderoso del país, manteniendo también sus 39 diputados y 12 senadores. Con esto, los radicales tienen en su mano el fiel de la balanza y sin su apoyo el gobierno se halla totalmente bloqueado en el Congreso. Se supone que el Partido Radical exigirá el desarrollo de una política menos insensible a los sacrificios que la "austeridad" ha impuesto a las clases media y popular;

c) Los tres partidos de izquierda (Comunistas, Socialistas y Democrático Nacional) que integran el Frente de Acción Popular (FRAP) han logrado 39 diputados y 9 de los 25 senadores que se elegían, con un total de votos que equivale al 29,2% del electorado nacional. Los comunistas han recuperado la fuerza relativa que tuvieron en sus mejores tiempos antes de ser puestos fuera de la ley y son el partido más poderoso del FRAP. En suma, la extrema izquierda chilena se ha robustecido y desde Cuba Fidel Castro ha saludado públicamente su triunfo, y

d) El Partido Demócrata Cristiano, que hace cuatro años representaba al 9% del electorado y obtuvo 14 diputados y un senador, es ahora, con más de 220.000 votos, (el 16,2% del total), la tercera fuerza política del país, casi a la par de los liberales, que son la segunda. La representación parlamentaria demócrata cristiana aumentó a 23 diputados (quizá 24) y a 5 senadores.

La distribución de las fuerzas políticas que revela la última elección es así la siguiente: La extrema derecha tiene el 32,3% del electorado; la extrema izquierda, el 29,2%; los radicales, que habría que clasificar como de centro-derecha, el 22,17, y los demócratas cristianos el 16,2%.

Obviamente, las dos fuerzas extremas —Derecha y FRAP— son inconciliables, pero fuera de eso nadie sabe en Chile qué combinaciones políticas pueden formarse en el futuro para determinar la marcha del país.

ALEJANDRO MAGNET